



Resolución del Comité Ejecutivo Federal del Partido Libertario

23 de junio de 2026

Transición al sistema de pensiones del Partido Libertario

Deuda aproximada actual con jubilados y trabajadores: **8 billones de euros**.

Periodo estimado para el proceso de transición: al menos una vida laboral, **unos 30/40 años**. Se podría prorrogar en caso de ser necesario para alcanzar los objetivos de financiación.

GARANTÍAS

Para los jubilados: se respetarán sus prestaciones actuales y todas las cotizaciones ya aportadas. Son los más estafados por el sistema. En la medida de lo posible, se mantendría la revalorización vinculada al IPC.

Para los trabajadores actuales: durante 30 años habrá una transición con un sistema mixto en donde irá aumentando cada año la aportación a una cuenta de capitalización privada y disminuyendo la aportación al sistema público de reparto. El dinero aportado hasta ese momento se cobrará como tarde en el momento de su jubilación.

De cara a que esta transición pueda ser llevada a cabo con garantías hasta su finalización y con el apoyo generalizado de la población, se podría realizar un **referéndum** popular que comprometa a futuros gobiernos a mantener este proceso durante las siguientes legislaturas hasta que se haya concluido del todo.

FINANCIACIÓN DE LA TRANSICIÓN

Privatización de activos y empresas: Se podría conseguir en total aproximadamente un billón de euros al finalizar el proceso de privatización total de todas las empresas y activos públicos.

Transición: Se iniciará una transición primero a un sistema mixto: se creará a cada contribuyente una cuenta para su capitalización privada que empezará solo con un 1% anual de las cotizaciones y manteniendo el 30% aproximado actual para el sistema de reparto.

Cada año, irá subiendo un punto porcentual la cotización que vaya a la cuenta privada y reduciendo un punto porcentual la cotización al sistema público de reparto.

A los 10 años, la cartera de capitalización se convertirá en totalmente privada y el Estado se desvinculará por completo de ella. Las cotizaciones al sistema público seguirán reduciéndose cada año hasta que sea posible eliminarlas por completo.

Aumento de la riqueza: liberalizar la economía y desregular el mercado de trabajo y empresarial debería incrementar considerablemente el PIB del país. Llegarían muchas empresas, aumentarían el empleo y los salarios y el Estado ahorraría más al reducirse la población dependiente.

Un escenario conservador implicaría un crecimiento añadido del PIB anual en torno al 1%, además de un adelgazamiento notable de los gastos del Estado.

Al aumentar los salarios y el PIB y mantenerse las pensiones en términos reales, debería ser considerablemente más asumible para el Estado ir reduciendo poco a poco el sistema público y las deudas sobre jubilaciones ya comprometidas a futuro.

Un ejemplo como el de Irlanda debería elevar en pocos años el PIB per cápita actual de España, unos 32.000€ aproximadamente, a más de 50.000€, en convergencia como la mayoría de países europeos. Esto generaría que las pensiones medias en España, unos 20.000€ aproximadamente, serían mucho más fáciles de sufragar y permitir que los trabajadores aceleren el proceso de transición desde el sistema de reparto al de capitalización.

En ningún caso se plantea aumentar la deuda pública para sufragar y acelerar la transición. El dinero para sufragar los 8 billones de euros ya comprometidos en pensiones debe salir de la privatización de activos públicos, una transición larga y un crecimiento económico vinculado a la liberalización de la economía y la reducción del gasto público.